

# El Presente del Pasado

BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DE HISTORIA, A.C.

[elpresentedelpasado.wordpress.com](http://elpresentedelpasado.wordpress.com)

NÚMERO 8, 12 de noviembre, 2012

---

## Sed de muertos

*David F. Uriegas*

Los historiadores somos una suerte de necrófilos: miramos el mundo a través de los muertos que por siglos nos han precedido. Eso no quiere decir que tengamos una imagen fría y objetiva del mundo, sino que podemos interpretar nuestra realidad como el resultado de un largo pasado que nos ha dado forma. Miramos desde donde estamos parados.

Y, sin embargo, parados sobre una cúspide intelectual, resulta que una inmensa mayoría se jacta de su conocimiento, y lo presume como un rico que se deleita con todo lo que él ha obtenido de su trabajo. El conocimiento, como el dinero, se resguarda en casa, sea una biblioteca, un aula o la mente misma. Cuando se comparte, parece que no es más que para seguir reproduciendo el mismo resguardo.

Tiendo a pensar que los hombres de ciencia, no por una pretensión intelectual (aunque ésta ha estado presente en la gran parte de la historia), no ha-

cen ciencia porque sí; no se financia la ciencia porque ciertas instituciones tengan que darle una salida cualquiera a su dinero.

El hombre hace ciencia porque tiene un afán sincero por encontrar la verdad, que obedece a una realidad histórica que presenta una necesidad, relevante o no, que puede ser satisfecha por ella. Luego entonces, la ciencia debe representar una carga significativa en aquellos que la deseen fervientemente, una carga significativa de responsabilidad que esté en función del individuo o de la colectividad; es decir, en función de la sociedad misma.

De otra forma, ¿de qué sirve leer ochenta libros para una tesis de licenciatura?, ¿de qué sirve que se encuentre la partícula de Higs?, ¿de qué sirve saber si el mundo está compuesto de ciertos elementos químicos? Si escribimos tan sólo en una hoja las preguntas que se nos ocurran, veremos que una hoja no basta: el deseo por saber es terriblemente grande y, bajo ciertas circunstancias, agobiante. Cabe la posibilidad de reflexionar acerca de cuál es la pregunta real que deseamos satis-

facer, cuál es la pregunta más relevante de todas. Quisiera saber de alguien que no desee saciar su sed de conocimiento, por más insignificante que ese deseo pueda ser. Y, sin embargo, saciar la sed tan sólo genera más sed.

Cabría entonces cuestionar al lector, sea historiador, sea filósofo, o sea ingeniero, o albañil, o campesino: ¿qué quiere saber? y ¿por qué quiere saber? Muchos critican al historiador en ciernes, sobre todo los viejos y los padres, con la idea, quizá por ignorancia o mucha sabiduría, de “para qué estudiar el pasado, pues el pasado, pasado está, ya no importa lo que sucedió; ¿para qué excavar lo que ya está muerto? Parece más una manía enfermiza que una necesidad científica.”

Quizá lo mismo sucede con el artista. En él parece haber un afán de conocimiento distinto, un afán por comprender el mundo, la realidad en la que vive y encontrar la razón de la razón. Quizá de ahí el pintor expresa sus ideas en cuadros muy diversos, porque una sola pintura no puede satisfacer su sed.

Quizá me equivoque, ¿pero no es

lo que sucede en todo ser humano? Ni la ciencia ni el arte satisfacen la sed de nuestros cuestionamientos. Con esto no quiero decir que deba evitarse intentar satisfacer esa necesidad, intentar hacer ciencia. Sabemos que el conocimiento sí tiene, por consecuencia, una función muy práctica en la vida humana y que este conocimiento con su consecuencia práctica debería cargarnos con una responsabilidad de lo que no podemos prescindir. 🍷

## Metahistoria del colegio electoral

Luis Fernando Granados

Salvo que ocurra, esté comenzando a ocurrir una catástrofe, Barak Obama será hoy reelegido presidente de Estados Unidos. Así lo indican casi todas las encuestas de opinión nacionales publicadas durante el fin de semana y también, sobre todo, lo afirman un puñado de encuestas estatales levantadas en varios “estados vetales” (como Florida y Ohio), que son por supuesto las que verdaderamente cuentan en un país que no elige a su presidente por voto directo.

Hace todavía una semana, sin embargo, el paisaje demoscópico llevó a más de un comentarista a especular acerca de la posibilidad de que Obama fuera elegido sin obtener la mayoría del llamado “voto popular”. La discusión hizo que una vez más se hablara de esa otra *institución peculiar* estadounidense, el colegio electoral, que desde 1789 media entre la voluntad ciudadana y la integración de las instituciones republicanas. Y también, inevitablemente, que se recordaran las *cuatro* o *cinco* ocasiones en que el presidente de Estados Unidos fue elegido a pesar de no haber obtenido la mayoría de los votos.

(Los cuatro primeros casos son bien conocidos: en 1824, John Quincy Adams fue elegido presidente a pesar de haber obtenido 38 149 votos

*menos* que su más cercano competidor; en 1876, Rutherford B. Hayes se impuso a Samuel J. Tilden no obstante haber recibido 254 235 votos *menos*; en 1888, los 90 696 votos *menos* de Benjamin Harrison no le impidieron prevalecer sobre su oponente; y en 2000, Al Gore cosechó 540 520 votos *más* que George W. Bush y sin embargo no fue presidente. El quinto es todavía materia de debate: es posible, con todo, que John F. Kennedy haya obtenido en 1960 unos 60 mil votos *menos* que su adversario republicano.)

El colegio electoral es ciertamente una institución extraña: concesión de los “federalistas” a quienes preferían mantener la alianza original de estados libres y soberanos que había obtenido la independencia y por ello se oponían a la constitución de 1787, el colegio fue imaginado como un segundo mecanismo —el primero era la integración del senado— para asegurarle cierto poder a las antiguas colonias, particularmente a las “pequeñas”. No otro era y es el propósito de la fragmentación territorial de los votos expresado en ese raro cónclave —pues, como dicen sus defensores, esa era y es la única manera de honrar la heterogeneidad regional de los votantes.

Es un poco más extraño que apenas se repare en el carácter contingente y antidemocrático de la institución; extraño porque ello ha permitido que el argumento sobre la legitimidad de sus existencia sea uno de apego a la *tradicición* (como en tantas otras discusiones de carácter constitucional) en un país que se precia de ser espacio privilegiado de la creatividad y la innovación.

Con todo, quizá lo más extraño de la existencia del colegio electoral y, en especial, del conocimiento de su falibilidad es que ambos hechos no parecen tener ningún efecto sobre la idea de la democracia estadounidense que prevalece en Estados Unidos y en buena parte del mundo. En efecto, en cualquier otro país el diseño y la prác-

tica de una institución semejante sería de inmediato denunciada como una negación, al menos parcial, del carácter democrático de sus instituciones políticas.

¿Por qué no ocurre lo mismo en Estados Unidos? Quizá porque casi todo análisis del pasado y el presente estadounidense descansa sobre un relato axiomático, una metahistoria, que afirma que Estados Unidos ha sido y es una *democracia* en el sentido puro del término —en lugar de situar su sistema político en el contexto histórico que le corresponde—. Al confundir los rasgos abstractos de la noción *democracia* con la historia de la democracia estadounidense “realmente existente”, peor aún, se empobrece tanto el concepto como la historia; se niega la posibilidad de matizar aquél y se vuelve imposible apreciar los rasgos más originales de la experiencia política allende el Bravo.

Porque, naturalmente, si en alguna parte hay que localizar —y admirar— la potencia de la democracia estadounidense no es en la reelección del presidente Obama, sino en los *referenda* que acaso legalicen a partir de hoy el consumo de marihuana en Colorado, Oregon y Washington. 🍷

## Estados Unidos y la guerra contra las drogas

Georgina Rodríguez  
y Fernando Pérez-Montesinos

Han pasado más de cuarenta años desde que Richard Nixon declaró oficialmente que el enemigo público número uno de Estados Unidos era el abuso de las drogas. Desde 1971, señala la película *The House I Live In*, la Casa Blanca y el Congreso se han obstinado en seguir la que ha llegado a ser “la guerra más larga de Estados Unidos”, gastando más de un trillón de dólares en sostenerla.

Apenas estrenada el pasado mes de octubre, *The House I Live In* muestra

los contradictorios resultados que ha tenido el manejo de las drogas como un asunto de seguridad nacional: en los mismos cuarenta años la producción, el comercio y el consumo de drogas no sólo no han disminuido, sino que se han incrementado exponencialmente. Las drogas son cada vez más baratas y variadas. El fracaso de la actual política antidrogas, demuestra Eugene Jarecki, escritor y director de la película, es evidente. ¿Por qué, entonces, continúa? ¿Quiénes se resisten a una reforma? Y sobre todo, ¿a quiénes perjudica?

Premiada como mejor documental en Sundance, *The House I Live In* muestra que la guerra ha afectado desproporcionadamente a las minorías y, en última instancia, a los sectores más pobres de la población estadounidense. El número de sentenciados por drogas sin agravantes de violencia pasó de 50 mil en 1980 a poco menos de 500 mil en el año 2000. A pesar de que la población “negra” de Estados Unidos (una de la de menores ingresos) constituye sólo el 13 por ciento del total, más de la mitad de los prisioneros son afroamericanos. Este desequilibrio, sin embargo, ha comenzado a cambiar en la última década. La expansión del negocio de las metanfetaminas, las crisis económicas y el consiguiente aumento de la pobreza han hecho ya de la población “blanca” de más escasos recursos el objeto de varios miles de arrestos (véase *aquí* el sitio del documental.)

Factores concretos han hecho que se reproduzca la estrategia. En lo local, la economía de comunidades enteras se basa en las detenciones de pequeños vendedores y consumidores: policías gratificados por cada arresto; prisiones privadas que funcionan como fuentes de empleo e impuestos, mientras que atraen a otros negocios (desde compañías telefónicas y aseguradoras hasta maquiladoras de armas y uniformes); redes de narcotraficantes cada vez más extendidas y beneficiadas. En el ni-

vel macro, el comercio de drogas y la venta de armas siguen aportando ganancias descomunales.

Lo expuesto en *The House I Live In*, y confirmado en las noticias día a día, revela que la guerra contra las drogas no es, en realidad, contra las drogas. Su principal efecto ha sido no el fin del crimen, sino la criminalización de la pobreza. En el discurso oficial, sin embargo, la necesidad de continuarla se sostiene incuestionada y perennemente. La conveniencia de poder señalar a un enemigo interno, las ganancias de empresas y grupos dedicados al *lobbying*, los vínculos con las asociaciones que se oponen a la regulación de la venta de armas de asalto y la legalización (o al menos despenalización) de las drogas han hecho que esta guerra se convierta, también, en un negocio político.

Desde Nixon, es casi imposible postularse a un puesto público o reelegirse sin una retórica de mano dura contra el crimen y las drogas. Los resultados de las elecciones presidenciales no implicarán cambios relevantes sobre la decisión de continuar la guerra: ni Barack Obama ni Mitt Romney se pronunciaron en contra de ella. Sin embargo, en cuestiones más específicas, han sido los miembros del Partido Demócrata los que han dado las iniciativas más recientes para reabrir el debate, por ejemplo, sobre la regulación de armas (véase *aquí* la plataforma electoral de los demócratas y la *nota* sobre el senador demócrata que propuso un plan para detener el tráfico de armas a México; en franca oposición, el 75 por ciento de los republicanos son renuentes al control de armas.

En este contexto se vislumbran

Esta *newsletter* es una publicación semanal del Observatorio de Historia, A. C., donde se recogen los textos aparecidos en [elpresentedelpasado.wordpress.com](http://elpresentedelpasado.wordpress.com)  
Sus editores son Halina Gutiérrez Mariscal y Luis Fernando Granados.  
Toda correspondencia debe dirigirse a [observatoriodehistoria@gmail.com](mailto:observatoriodehistoria@gmail.com)

algunos resquicios de luz. La opinión pública con respecto a la marihuana ha ido cambiando en los últimos años. Según Gallup, por primera vez desde que se inició la “guerra contra las drogas”, el 50 por ciento de la población estadounidense está a favor de su legalización (ver la *nota aquí*). Más aún, es prácticamente un hecho que los estados de Colorado y Washington aprobaron ayer la legalización de la marihuana, lo cual podría incluso tener un fuerte impacto en las ganancias del narco mexicano (ver la *nota aquí*).

Ninguna de estas iniciativas pone en cuestión el discurso dominante que sostiene la necesidad de continuar la guerra contra las drogas. Para ello, se requiere tener una visión más amplia y de más largo plazo sobre lo que ella ha significado en la historia reciente de Estados Unidos y del mundo. Tal es la visión propuesta por *The House I Live In*. Y así fue también el discurso que llevó al propio Estados Unidos la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hace un par de meses.

Para que esta visión pueda volverse palpable en propuestas políticas, quizá sea importante comenzar desde el relato histórico —relato que es también el los grupos más afectados desde aquel año de 1971—, pues la historia sobre la “guerra contra las drogas” está todavía por escribirse. 🍷

## Las caras de un monumento

Gerardo López Luna

Como a cualquier cosa, por necesidad damos significado a los monumentos y esculturas que se instalan en las calles y plazas públicas. Los alegatos constituyentes de 1847 utilizaron el argumento de las “virtudes cívicas” y la necesidad de crear monumentos con la finalidad de educar a los hombres y mujeres para el nuevo orden y convivencia.

A las esculturas erigidas en monumentos las encontramos como santos civiles en altares horizontales que son las calles o en las plazas que son sus nichos. Los reconocemos y, cuando no, si es mucha la duda, buscamos la placa que los identifique; algún dato recordaremos.

Cuando invaden nuestro camino y tropezamos con ellas, nos alienan unos segundos, se instalan en nuestra vida y provocan lo mismo que cuando platicamos con nuestros prójimos. Los vemos-escuchamos y nos preguntamos: qué me dicen, para qué me lo dicen y qué quieren que piense. Quizá para algunas de las esculturas y monumentos que se refieren a nuestra historia patria —como de otros países—, las respuestas son inmediatas; pero las que desconocemos caen en el olvido o buscamos la información necesaria para significarlos. Al ciudadano que se detiene con interés a ver los monumentos y esculturas, ¿qué le provocan?, ¿acaso respira el oxígeno del nacionalismo y nutre sus glóbulos blancos y rojos con uno verde?

Otros nos sentamos bajo la sombra de los árboles que los rodean y, si el lugar resulta acogedor, hasta los convertimos en puntos de reunión y encuentro. Así se convierte el monumento o plaza en una zona donde existe tranquilidad, descanso y hasta Amor. Los dotamos de un significado sin importar las acciones que evocan —si las hubo realmente.

Para nuestros gobernantes, un monumento significa la oportunidad de hacer política o, mejor dicho, de acercarse a los círculos de poder e influencia que —según ellos— los llevarán a mejores cumbres; porque nunca se sentarán a admirar el monumento que autorizaron y mucho menos a conocer el pasado que representan. La estatua de Heydar Aliyev, ex dictador de Azerbaiyán, en el paseo de la Reforma es el caso más reciente, pero no el único que también tuvo ése entre sus fines.

No seremos nuevos iconoclastas: me gustan las esculturas y los pedestales. Existen excelentes como la de Carlos IV o la de Pancho Villa que se encuentra en el parque donde los venados le robaron su nombre. Me hacen sentir que provengo de algún lugar y que mi destino se construye. 🍷

## Peña Nieto y la desmemoria de lxs historiadorxs

*Aurora Vázquez Flores*

Mucho se ha dicho de la poca participación que tienen lxs historiadorxs en la toma de decisiones estatales en materia de memoria histórica y conservación del patrimonio cultural. Este Observatorio de Historia, por ejemplo, nació de la preocupación de un grupo de profesionales de la historia por incidir directamente en las discusiones de estos asuntos. De igual manera, es necesario pensar de forma crítica acerca del modo en que lxs colegas se relacionan con las políticas estatales, desde qué punto de vista y con qué medios.

El 5 de noviembre pasado, Enrique Peña Nieto se reunió con un grupo de intelectuales para conversar sobre la política cultural que llevará a cabo el próximo gobierno de la república. En el encuentro estuvieron presentes —por parte del equipo de transición de EPN— María Cristina García Cepeda, coordinadora de cultura; Aurelio Núñez, coordinador de educación, y David López Gutiérrez, coordinador de comunicación social. Asistieron a la reunión Miguel León Portilla, Rafael Tovar y de Teresa, Eduardo Matos Moctezuma y la directora general de ConArte, Lucina Jiménez, entre otrxs científicxs y profesionales de la cultura.

De la reunión, se informó que no se busca conformar una “nueva” política cultural para el país, sino “fortalecer mecanismos de apoyo para que la ya existente se siga dando en un ambi-

to de libertad, pero con visión de futuro en el transcurso del siglo XXI” (al menos así lo reportó *La Jornada*). Ello significa que no hay una crítica efectiva, de ninguna de las partes presentes en la reunión, sobre las características de la actual política cultural del estado mexicano.

De acuerdo con las declaraciones hechas —tanto por el equipo de transición como por los intelectuales participantes— no se hizo un planteamiento acerca de la corrupción e ineficacia de las instituciones culturales actuales, de la falta de democracia y pluralidad en la toma de decisiones en materia de conservación del patrimonio, o de la visión de la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios como una mercancía. Por el contrario, Rafael Tovar y de Teresa —de acuerdo con la nota de *El Universal* (ver *aquí*)— señaló que se debe “mejorar la imagen del país en el mundo, debe mejorar la percepción que se tiene de nuestro país y se debe difundir la enorme riqueza que tenemos”. Como si el problema del patrimonio nacional estuviese en la imagen de nuestro país en el exterior y no en la falta de una política clara e incluyente en esta materia.

Es de resaltar que Miguel León Portilla planteó la urgencia de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en México, de reconocer las lenguas originarias como oficiales y criticó “una actitud tontamente paternalista” del estado mexicano. Este planteamiento lleva a pensar en cómo la política cultural actual ha relegado a los pueblos originarios, sus lenguas y tradiciones, y a también a recordar el estado de pobreza en el que se encuentran comunidades que no logran —o no quieren— empatar con la lógica turística y mercantilista a la cual se les ha arrinconado, como Dalia Argüello hizo notar en este *espacio* a propósito de lo sucedido en Batopilas, Chihuahua.

Lo que al parecer Miguel León Portilla no recuerda es a quién le esta-

ba presentando esta propuesta. Ignoró el enfrentamiento que en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el gobierno de Enrique Peña Nieto violó diez derechos humanos a 209 personas, lesionó y torturó a otras 206, y 26 mujeres fueron víctimas de agresiones y violaciones sexuales. (Así lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos.) El conflicto se originó por la decisión de los pobladores de defender sus tierras en contra del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en la zona.

Contra lo que señaló Ciro Gómez Leyva en *Milenio*, la complejidad de la reunión no puede reducirse a los intentos de EPN de “superar el agravio de los tres libros en la Feria de Guadalajara”. El problema radica en una visión de estado basada en la incomprensión, la intolerancia y la mercantilización de la vida. Radica, también, en el desinterés del nuevo gobierno por las necesidades de los pueblos originarios, tal como se mostró en 2006. 🍷

## Rentar un prestigio

*Israel Vargas Vázquez*

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar el evento de una prestigiosa marca francesa de perfumería y cosmética en la ciudad de México. Como es costumbre, la asistencia y parafernalia siempre forman parte de algún lanzamiento, algo que amerite entrar al mercado por la puerta grande. Sin embargo, no sólo eso cuenta para engalanar un evento o un producto; si se tienen los recursos, también alquilar un prestigio por unas horas. Ese prestigio prestado fue precisamente el lugar de dicha presentación, ni más ni menos que el Palacio de la Autonomía de la UNAM.

Uno se preguntaría, ¿quién renta esos espacios a particulares o empresas trasnacionales? Y con espacios me refiero a los inmuebles que la UNAM conserva, por ejemplo San Ildefonso,

San Carlos, el Palacio de Minería, la Antigua Escuela de Medicina, la Casa del Lago, entre otros (aquí el [link](#)) que son *recintos históricos* usados, como se anuncian, para tener “originalidad y distinción en la realización de eventos”. Se ofrecen como si fueran salones de fiestas, es decir, adecuados para la realización de conferencias, conciertos y “eventos corporativos”. Para complementar este ejemplo, el Palacio de la Escuela de Medicina especifica en la *web* que tiene capacidad de “80 hasta 900 personas en coctel”.

Uno vuelve a preguntarse, ¿qué entiende Fundación UNAM por “recintos históricos”? Son edificios emblemáticos de la ciudad de México y sumamente importantes para la historia urbana y la historia de la educación en México. Hemos conservado estos lugares por la densidad histórica que se respira en sus pasillos, balcones, fachadas, frisos, portones y patios, que difícilmente se pueden comparar con otros edificios de la capital.

La UNAM ha logrado conservar estos recintos históricos porque los ha defendido a capa y espada, los ha conservado y cuidado perfectamente. Sin embargo, por un afán económico, independientemente de los beneficios hacia la fundación, los pone en riesgo de maltrato, pero, sobre todo, del concepto equívoco que las nuevas generaciones tendrán sobre estos monumentos arquitectónicos.

Si no mal recuerdo, el día de los premios Oscar en 2006, la televisora del Ajusco rentó el Antiguo Colegio de San Ildefonso para que parte del escuadrón de Paty Chapoy transmitiera el evento en vivo y el posible Oscar a la película *Babel*. Un servidor asistió a medio día al recinto y justo antes de entrar, pedazos de la fachada (del tamaño de un puño) cayeron a la banqueta. Entre reclamos y insultos de mi parte al personal que, colgado, se encontraba colocando los cables de energía por enfrente de la fachada (¡por Dios!, imagínese usted, “cables

de voltaje golpeando la fachada de San Ildefonso”), les manifesté fuertemente que estaban lastimando un monumento histórico y al avisar al personal de vigilancia del museo. Todo quedó en una llamada de *woki toki* que nunca garantizó restaurar el daño.

Fundación UNAM tiene sus criterios para cuidar los recintos durante los eventos, pero la cuestión no es esa, sino la renta de un lugar que definitivamente no fue construido para “eventos corporativos” sino como espacios para el desarrollo, enseñanza y difusión de la ciencia y el arte. Desde este Observatorio les instamos a tomar conciencia de ello, porque nuestra labor nunca acabara con una llamada de *woki toki*. 🍷

## El valor de las boletas

*Luis Fernando Granados*

Estaba previsto que mañana comenzarían a destruirse las boletas de la elección presidencial de 2006. Así lo había decidido el Consejo General del IFE el 3 de octubre. El viernes 9, sin embargo, su presidente anunció que la destrucción de los documentos se pospondrá hasta que se resuelva el litigio presentado por Rafael Rodríguez Castañeda, el director de *Proceso*, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La noticia se produjo tan tarde que la edición impresa de *Proceso*, que comenzó a circular el sábado, ya no alcanzó a incluirla. Y ocurrió de modo tan discreto que ni *Reforma* ni *La Jornada* ni *El Universal*, en sus ediciones en papel del fin de semana, la dieron a conocer en sus primeras planas. Hay algo absurdo en ello: pues la decisión del IFE es tanto o más trascendente que la toma de la rectoría de la UACM o la aparición de fotos que documentan la emboscada de Tres Marías.

*Proceso* ha ganado una nueva batalla en beneficio de todos: en beneficio del presente y en favor de la “memoria



histórica” del país. Aunque no se trata todavía de la batalla definitiva —el IFE sólo anunció la suspensión de su decisión destructora, no el reconocimiento de que las boletas deben ser preservadas— la persistencia de la revista tiene que ser reconocida y aplaudida. Sin ella hace tiempo que hubiera desaparecido una de las series documentales más importantes para estudiar las elecciones de hace seis años.

No es que los documentos lo sean todo, por supuesto. Como sabe cualquier estudiante de primer año de cualquier licenciatura en historia, las “fuentes” son apenas un ingrediente del ejercicio historiográfico. Y en realidad no son su pieza más importante. Para empezar, porque las fuentes no preexisten a la investigación sino que son construidas por la cabeza que investiga (por eso cualquier artefacto —un recibo telefónico, un exvoto, un camino de terracería— puede conver-

tirse en fuente). Lo que a menudo se olvida, más aún, es que ningún documento tiene valor en sí mismo; la verdad no habita en ellos. Son los argumentos historiográficos los que los dotan de sentido y valor.

¿Para qué sirven entonces las boletas electorales? ¿Por qué es importante su preservación? Por una parte, porque las boletas son evidencia, *confirmación*, de un conocimiento social que ha ido gestándose desde la noche misma de las elecciones de 2006. Ese conocimiento, sin embargo, no depende de un solo documento para existir; es resultado de inscribir una gran cantidad de documentos en un marco analítico transparente a partir del cual es posible elaborar una argumentación lógica. En plata, eso significa que no necesitamos contar (con) las boletas para saber si en 2006 hubo fraude electoral o no.

Pero, por otra parte, la disputa

entre el IFE y *Proceso* constituye en sí misma un indicio capital acerca del valor de las boletas. Como en cualquier otro ejercicio de crítica documental, la historia de cómo y por qué la boletas de 2006 siguen existiendo ayuda a valorar estos documentos tanto o más que los documentos mismos. En el corazón de esa historia se encuentra un gobierno que no sólo ha sido legalista en su interpretación de la ley, sino que ha movilizad todos sus recursos, con terquedad comparable a la de *Proceso*, para impedir que las boletas sobrevivan y sean estudiadas.

Este último aspecto revela también lo que acaso sea una obviedad pero que conviene no olvidar: que la batalla sobre la existencia de las boletas no tiene que ver con el presente. Tiene que ver con el pasado y por ello con el futuro: es fundamentalmente acerca de la manera en que será recordado Felipe Calderón. 🍷